

IX Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2011.

# ¿Existe una revolución en Bolivia?.

Bruno Fornillo.

Cita:

Bruno Fornillo (2011). *¿Existe una revolución en Bolivia?.* IX Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-034/647>

*Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.*

## ¿Existe una revolución en Bolivia?<sup>1</sup>

Bruno Fornillo

UBA-CONICET

[bmfornillo@gmail.com](mailto:bmfornillo@gmail.com)

Resumen: El halo progresista de buena parte de los gobiernos del subcontinente impide ver hasta qué punto hay cambios reales acaeciendo en nuestros países. Esta ponencia, por tanto, se pregunta si en Bolivia existe o no una revolución. Más llanamente: ¿Qué fue lo que cambió en el país andino-amazónico? La hipótesis que surca el trabajo es que estaríamos en presencia de una serie de tendencias que a su vez se correlacionan con el tipo de estructura socioeconómica de Bolivia, con el carácter “abigarrado” de su sociedad. Si una primera reside en la posibilidad de afianzar la expansión reproductiva del capital, que no poco se apoya en la lógica propia de las economías familiares, de la unidad doméstica, de la pequeña propiedad individual, y que se lleva bien con el perfil neodesarrollista por el cual no deja de apostar el gobierno; una segunda encaja más nítidamente en el significativo “descolonización”. Se trataría, en este caso, de reforzar profundamente las lógicas comunales esparcidas por la totalidad de la geografía andino amazónica, tendencia que a veces suele encontrar una más clara inscripción en la idea de socialismo comunitario o en la apuesta por el “vivir bien”, tantas veces proclamado. Una última posibilidad que hoy por hoy en poco se relaciona con la Bolivia real consiste en pensar que se estaría cerca de alumbrar un renovado socialismo. Con todo, observamos finalmente la chance de distintas combinaciones posibles de estas tendencias, cortejándolas con la posibilidad de toparse -algo ya clásico en Bolivia- con una revolución “interrumpida”.

Palabras claves: Bolivia. Revolución. Recursos naturales. Neodesarrollismo. Descolonización.

“Tal reacción de amenidad recíproca, sin embargo, no existe para los miembros de una entidad comunitaria de origen natural, ya tenga la forma de una familia patriarcal, de una comunidad índica antigua, de un estado inca, etcétera. El intercambio de mercancías comienza donde terminan las entidades comunitarias, en sus punto de contacto con otras entidades comunitarias o con miembros de estas. Pero no bien las cosas devienen mercancías en la vida exterior, también se vuelven tales, por reacción, en la vida interna de la comunidad. La proporción cuantitativa de su intercambio es, en un principio, completamente fortuita. Si las cosas son intercambiables, ello se debe al acto de voluntad por el que sus poseedores resuelven enajenarlas recíprocamente. Aun así se consolida, de manera paulatina, la necesidad de objetos para el uso ajenos. La repetición constante del intercambio hace de él un proceso social regular. Con el paso del tiempo es forzoso que se produzca por lo

menos una parte de los productos del trabajo con la intención de volcarlos en el intercambio. A partir de ese momento se reafirma, por una parte, la escisión entre la utilidad de las cosas para las necesidades inmediatas y su utilidad con vistas al intercambio. Su valor de uso se desliga de su valor de cambio” Carlos Marx, **El capital**.

En la Bolivia “post-constituyente” del segundo mandato “evista” un destino cercano a lo que sucede de hecho parece apuntar decididamente a consolidar un neodesarrollismo jalado por un Estado “fuerte”. Se trata de una opción que ha cambiado de nombre sucesivas veces (“Capitalismo Andino”, “Modelo Económico Nacional Productivo”, “Salto industrial boliviano”) pero que guarda como denominador común el intento de desarrollar el país sobre la base de una gestión pública que –a distancia del pasado neoliberal- se capitalice, invierta y produzca, tomé así las riendas de la economía, y vuelque al conjunto de la población lo obtenido: construyendo infraestructura, en forma de créditos a las medianas y pequeñas empresas, en base al universo de bonos sociales. Se trata -como se ha dicho en varias oportunidades- de un “Estado soberano” para el cual las empresas extranjeras sean “socias y no patrones”, para así recuperar los recursos estratégicos como plafón de una industrialización que sostenga la locomotora del crecimiento económico organizando el capital.

Los números de la economía “evista” parecen colorear este modelo “patriótico”: durante la primera gestión el PBI creció a un ritmo del 5,2% anual; mientras las exportaciones subieron de 2.867 millones USD en 2006 hasta 5.366 millones en 2009. Hoy Bolivia está “blindada” ante las adversidades internacionales, dado que las reservas aumentaron de 1.714 millones USD en 2005 a más de 9.000 millones USD a fines de 2010, gracias al primer superávit fiscal en 30 años. Respecto al Estado, según datos oficiales, participó en cerca del 33 por ciento de la economía en 2010, solventando una inversión que rondó los 2.200 millones USD<sup>2</sup>. De este modo, el gobierno nacional buscó reanudar la clásica intención de insertarse en el escenario internacional bajo una relativa autonomía, al compás de una *performance* económica de la primera gestión evista tan inesperada como exitosa en términos de crecimiento del PBI.

¿En qué sustrato social encontró apoyo esta tentativa? Indudablemente, la antigua élite socio-económica de Bolivia parece haber entendido que llegó la hora de abandonar su corriente ceguera por una más clara percepción de que es aconsejable subirse al tren del avance económico, y así obviar los aspectos que juzgaban más crispados del área político-cultural del MAS (que a su vez tendencialmente fue disminuyéndolos), si al fin y al cabo el vicepresidente afirmó en la Expocruz de fines de 2009: “A los empresarios les decimos que tienen mandatarios para quienes la palabra producción es una sinfonía para sus oídos”<sup>3</sup>. Por caso, esta suerte de afinidad basada en la común intención de efectivizar una reproducción ampliada del capital puede colegirse del contacto cercano del gobierno con la élite agroindustrial de tierras bajas en procura de asegurar la reducción de las importaciones de alimentos -que en el 2007 llegó casi al record de 871.328 toneladas-, en detrimento de las pequeñas y medianas propiedades agrícolas (que según la Constitución deberían ser la clave de la “soberanía alimentaria”); a cambio el gobierno nacional recibió la

petición de morigerar los aspectos más punzantes de la Reforma Agraria. En suma, la proto burguesía que basa su poder en la participación en áreas claves de la economía no ha tenido por qué inquietarse, muy por el contrario, y claro está que de todas las opciones posibles una “modernización ordenada” comienza a ser vista con creciente simpatía.

Ahora bien, en el otro extremo socioeconómico, lo cierto es que esta tendencia reseñada puede ser solidaria a una serie de lógicas propias de los sectores que conforman la base ancha, plebeya, del “evismo”. El aumento cierto de la recaudación del Estado no deja de dirigirse a los sectores siempre marginados, sea a partir de la obra pública o en los nuevos negocios de la maquinaria estatal, sea con la batería de política sociales (bono Juancito Pinto, Juana Azurduy, la Renta Dignidad); el auge minero, por ejemplo, bien está nutriendo a los cooperativistas que además han consolidado sus propiedades; el lento “derrame” del crecimiento económico suele tocar al nutridísimo sector de cuentapropistas y gremiales; los agronegocios y las promesas que ofrece el control de la tierra no son necesariamente descuidados por los campesinos, por los colonizadores y los cocalleros -incluso por los sectores indígenas-; la economía informal boliviana demuestra una recurrente capacidad de crecimiento que suele ser aprovechada por lo más diversos actores económicos, en suma, esa amplísima agregación de economías familiares enclaustradas en un mar de pequeñas propiedades puede que termine por apañar la dinámica neodesarrollista en la que se ha embarcado el gobierno. Se trata de la existencia de un núcleo plebeyo, campesino en especial, de tradición “estadocéntrica” como afirmó Silvia Rivera Cusicanqui (Rivera, 1985: 167), cuya propiedad individual puede llevarlo a actuar con la lógica tradicional del “campesino rico”, al cual no solo puede alcanzar el estatus de dirigente sino a trazar su horizonte de deseo en estrecho contacto con la intención de afianzar una modesta pero constante “acumulación primitiva” de capital.

En Bolivia, el sistema internacional no ha sido influyente en el proceso de cambio, más allá de la común resistencia al neoliberalismo, el ciclo político es autóctono, autogestado, incluso expansivo, contribuyendo a moldear una rebelión de estirpe andina. Igualmente, en lo que respecta a los factores externos, al marco geopolítico regional, podría decirse que inciden para reforzar el derrotero descripto. Los gobiernos progresistas del sub-continente, particularmente los colindantes más importantes -Argentina y Brasil-, embebidos en cierto *elam* nacionalista y neodesarrollista, apelan, antes que nada, a una expansión del capital con visos de dignidad descuidados por el “Consenso de Washington”, recorrido que Bolivia podría ver con buenos ojos. Precisamente, hacia este mercado regional se destina el mayor caudal de las exportaciones gasíferas, fundamentalmente a la economía paulista, gestora de los nuevos proyectos hidroeléctricos y del corredor bioceánico -Celso Amorim, ministro de asuntos exteriores del país verde-amarelo, advirtió a la élite santacruzense que no tenía porque exaltarse ante una gran rebelión que no era más que un proceso de reformas-. El peso de esta vecindad doméstica parece ser hoy más determinante que la polaridad más rimbombante del país, la que se tejó entre el ALBA chavista y la incesante presencia estadounidense (que lejos está, en realidad, de gravitar como lo hacía años atrás).

Así las cosas, esta alternativa permite al elenco gubernamental satisfacer a buena parte de los actores sociales, y entonces está en condiciones de pugnar por autoreproducirse a partir de la fuerza del número electoral, y no es un dato menor esa novedosa devoción de Evo Morales por la estadística económica. En estrecha relación, bajo esta lógica, las organizaciones sociales no tendrían por qué reprocharse un talante en exceso corporativista, es decir, prestas a reivindicar sus intereses individuales, puesto que representa un tipo de demanda solidaria al *savoir faire* del Estado. Al interior del gobierno nacional fue más que significativo el sector que en los hechos puso énfasis en la necesidad de ampliar y fortalecer la intervención del Estado en la economía, “blindó” el área económica -la cual mantuvo en altos cargos a antiguos funcionarios de las anteriores gestiones “liberales”-; y se alimentó de militantes del viejo nacionalismo estatista y abarcó desde marxistas hasta antiguos funcionarios públicos, sin dejar de ganar la adhesión palpable de la alta cúpula gubernamental. De manera asociada, la amplísima dirigencia sindical, bien representada por Evo Morales o por Fidel Surco de los “colonizadores”, tendió a expresar un sentido práctico antes que programático.

Ahora bien, ¿fue viable esta opción en “sus propios términos”? El inicial ímpetu nacionalizador sobre los bienes básicos del país no solo fue interrumpido sino que en si mismo ha sido bastante relativo; y no habría que desconocer que el papel del Estado en la economía nacional era increíblemente inocuo; de hecho alcanzó un porcentaje común en sus países vecinos. En este rubro, aunque el Estado aumentó su participación en minería (COMIBOL), telefonía (ENTEL), electricidad (ENDE) y creó empresas públicas (papel, azúcar, lácteos, cartón, cemento), la avanzada sobre el vital recurso gasífero y petrolero en manos de YPFB estuvo más cerca de una participación razonable del Estado que de una decidida estatización, no por casualidad las empresas transnacionales (Petrobras, Repsol, etc.) permanecieron en el país, tampoco por casualidad reinaba el desconcierto acerca de la real nacionalización cuando estalló el “gasolinerazo”, y no es un dato menor la “ineficiencia” y la “corrupción” padecida, despertando la incógnita sobre si efectivamente contribuye a la ruptura de la dependencia nacional. Las optimistas tasas de crecimiento respondieron en gran medida al incremento de la producción -y en gran parte de los precios- del gas y de los minerales. En el 2007, de los 10 rubros más importantes de exportación, el gas natural representó el 40,6 por ciento de las exportaciones totales, mientras que los diversos productos del área minera representaron el 26,3 y los productos agrícolas el 9,4.

Sea como fuere, el núcleo de la argumentación programática de esta tendencia puede narrarse del siguiente modo: Actualmente, el vivir bien consiste en “manejar la tensión entre la protección de la naturaleza y el desarrollo productivo con el fin de generar recursos públicos que garanticen a la población las condiciones básicas mínimas –afirma el vicepresidente–”, en una suerte de política incluyente, y continúa: “quisiéramos impulsar lo comunitario, pero de momento tenemos que impulsar el fortalecimiento económico del Estado como medio para generar excedentes que nos permitan apoyar a la producción comunitaria” (SENA-Fobomade, 2010:2). Entre el realismo y el posibilismo parece así escamotearse la lucha política, en un sistema de argumentación propio de la política conservadora, que tiende a transitar el “circulo perverso de

la dependencia” (Prada, 2010: 1). Si bien parecen existir intentos de superar las etapas más comunes del desarrollo, cierto es que hoy vemos consolidarse el modelo primario exportador de carácter extractivista. Al respecto, el aporte del sector industrial a la economía fue reduciéndose desde el 2000 al 2009.

Por esta línea, la nueva fase de la economía boliviana que comienza en 2010 podría resumirse en la “revolución en infraestructura y la industrialización de las riquezas naturales del país” (SENA-Fobomade, 2010:2) en los sectores de energía (hidrocarburos e hidroelectricidad), minería y agroindustria. Obviamente, los miramientos para con el impacto ambiental y de los derechos de los pueblos locales se encaminan a la nulidad a la hora de sostener estos megaproyectos. Es que cada vez parece ser más patente que existe una suerte de abismo entre la retórica indigenista radical y las acciones concretas del gobierno del MAS, un país que pareciese anunciar una vanguardia que dista de asumir para sí.

### **Socialismo comunitario y giro biocéntrico**

Al promulgar la flamante y renovada Constitución Política del Estado Plurinacional, Evo Morales aseguró “llevar al país hacia un socialismo comunitario”. La magnitud de esta chance puede colegirse de tres factores entrelazados que remiten a la composición política de la comunidad, a los alcances del proceso de cambio y a una nueva narrativa emancipatoria. Primeramente, las lógicas sociales que apelan a la práctica colectiva anidan en Bolivia, es decir, las comunidades originarias indígenas-campesinas acusan una historicidad que supera los milenios y son el núcleo de la potencia social desplegada; apelando en sí a la decisión común para la elección de sus autoridades, a la hora de emprender la faena productiva, al considerar la propiedad de sus medios de producción. Obviamente, las propias “tensiones” internas, las fuertes corrientes migratorias hacia las populosas ciudades como El Alto (que igualmente no dejan de traspasar estas lógicas al área urbana) y los vínculos complejíssimos que este recíprocarario sistema de intercambio traza con las dinámicas del capital<sup>4</sup>, obligan a atemperar las imágenes idealizadas o románticas, pero es indudable que Bolivia cuenta -quizás como ningún otro país del subcontinente- con la tremenda potencialidad política de la “forma comunidad”. Naturalmente, cuando René Zavaleta Mercado sostenía que Bolivia presentaba un carácter social abigarrado abría la puerta a la existencia estructural de modos de producción heterogéneos a la dinámica capitalista, circulando entre las comunidades autorreguladas, el estado fuerte, y socialismo de raíz obrerista (el conjunto del movimiento social accede y permanece en la tierra, por ejemplo, en base a derechos políticos antes que económicos). Incluso, no deja de ser cierta esa colocación paradójica del obrero social, soporte social que se amplió luego de que disminuyese el poder del clásico proletariado minero<sup>5</sup>. En los hechos, bien podemos comulgar con la tesis de que “Las comunidades son estructuras estructurantes en la matriz de la sociedad” (Prada, 2010: 4) boliviana.

Seguidamente, la pluralidad de sentidos emancipadores florecieron a lo largo de todo el ciclo político con un carácter de lo más radical, no fueron menores la innovación política y el pensamiento estratégico desplegados para avivar y

mantener en constante tensión el ciclo de expansión hegemónica: los levantamientos que derribaron cinco presidentes; la construcción de legitimidad social; las alianzas conformadas por el infinito archipiélago de organizaciones; la confluencia en torno a los instrumentos políticos —sea el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) o el MAS—; la presencia electoral que catapultó a la experiencia de dominar el Palacio Quemado. Esta “marea alta de la política plebeya” forzó a la subjetividad colectiva a crear un relato emancipatorio que haría las veces de gramática general de los anhelos populares de la época, los cuales no dejan de ejercer su influjo sobre las tendencias menos prometedoras. En otras palabras, las chances de instaurar una sociedad más igualitaria está inscrita en la “genética” misma del proceso de cambio, puede acaso interrumpirse, pero nunca eliminarse.

Por último, no por casualidad Bolivia representa realmente una singularidad a escala planetaria. Luego de la conocida debilidad de la izquierda, su ciclo político operó en dos escenas claves. De un lado, representó una alternativa en acto a la debacle del socialismo real, a partir de la potencia de la movilización societal, es decir, forjada “desde abajo”, desde el momento en que logró volver a poner en el centro el problema del Estado pero bajo nuevos términos, en suma, cuando consiguió que la política emancipatoria retorne y sea nuevamente pensable. Pero eso fue posible debido a que, por otro lado, vino a cuestionar de cuajo tanto la era neoliberal como la dinámica actual del capitalismo, lo que es aún más importante, puesto que la defensa de los recursos naturales —elemento presente en todo el ciclo político, las guerras fueron por el agua, la tierra, el gas— se combinó con un patrón civilizatorio que posee una “reserva narrativa” capaz de enfrentar a la destrucción ecológica del capital, la subsunción real de la naturaleza al capital. Según Evo Morales, que ha hecho de los “derechos de la madre tierra” su principal y resonado discurso en el exterior, Bolivia constituye una alternativa al capitalismo depredador que persigue el “desarrollo económico ilimitado”, una apuesta que no solo haría posible el socialismo sino “salvar a la madre tierra del capitalismo” —tituló del discurso que brindó el presidente en el mayor evento boliviano del 2010, la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, convocada en Cochabamba<sup>6</sup>—. En resumen, el ciclo político rebelde andino-amazónico fue capaz, en palabras del canciller Choquehuanca, de ofrecer un programa político de gran escala:

“Nosotros queremos una vida armónica no solamente entre los hombres sino también entre el hombre y la naturaleza, y cuando hablamos de la sociedad estamos hablando de las personas, es excluyente, no toma en cuenta el todo. Tenemos que decir “la nueva Constitución Política del Estado algún día nos va a permitir construir una nueva vida”. Porque para nosotros lo más importante es la vida, para el socialismo lo más importante es el hombre, porque el socialismo busca la satisfacción de las necesidades tanto materiales como espirituales del hombre. Ese es el centro del socialismo, la ley económica fundamental, satisfacción de las necesidades del hombre. Para el capitalismo lo más importante es la obtención de la plusvalía, de la ganancia, el capital. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, tenemos coincidencias con el socialismo, pero la lucha de los pueblos indígenas va

más allá del socialismo. Para el capitalismo lo más importante es la plata, el capital. Para nosotros lo más importante es la vida.” (Choquehuanca, 2010).

A no dudar que en la centralidad de la categoría de vida, en el discernir su certero potencial político, radica buena parte de la estructuración del relato emancipatorio para el siglo que despunta. En este sentido, no solo debemos al área andina su emergencia -y verdaderamente nace de la “periferia social de la periferia mundial” (Tortosa, 2010: 120) - sino claves de su significación, las cuales además están constitucionalizadas. Está opción nominada socialismo comunitario -que el país ha tenido el mérito no menor de volver a poner en la “orden del día” con cierto grado de realismo- se expresa, entre otras cosas, en el paradigma civilizatorio connotado en la idea de *suma qamaña* aymara, en el término *Kapac* quechua, en el *Iyambae* guaraní, que refiere a una persona que se mueve de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Una cosmovisión política que no ata la vida a la renta sino a la relación armoniosa con la naturaleza, reubica al hombre al interior de la tierra a la cual pertenece, refiere a la vida concreta de personas concretas, un neohumanismo que desliga la existencia del plus de goce irrelevante que propicia la semiótica del capital; en palabras de José Tortosa: “*Sumak kawsay* expresa la idea de una vida no mejor, ni mejor que la de otros, ni en continuo desvivir por mejorarla, sino simplemente buena. *Suma Qamaña* viene del aymara boliviano e introduce el elemento comunitario, por lo que tal vez se podría traducir como “buen convivir”, la sociedad buena para todos en suficiente armonía interna” (Tortosa, 2010: 119). Es, como se ha dicho en varias ocasiones, una política del “posdesarrollo” que pone en el centro a la vida, un “giro biocéntrico”. Digamos entonces que Bolivia supo alumbrar un nuevo modo de histórico de la política, organizado por la categoría de la “pulsión autorganizativa”, teniendo lugar en los territorialidad que suele llamarse “mundos de vida”, pero bajo la prescripción de que es preciso refuncionalizar el poder de Estado como condición para la realización de la prescripción del vivir bien, como modo expresivo de la forma comunidad hacia el conjunto del país (Lazarus, 1997). En definitiva, una de las tendencias posibles que se encuentra inscripta en la estructura social boliviana, en su magma ideológico y que se anuncia bajo el término descolonización se asienta en el intento de reforzar la matriz comunitaria tan hondamente arraigada en el país andino amazónico.

Ahora bien, esta chance ¿Estuvo ausente de la políticas concretas? Sería iluso pensar que su capacidad instituyente estuvo ausente en la política desplegada en el quinquenio 2005-2010. En primer lugar, la Nueva Constitución Política del Estado, que representa en acto esa potencia, está insuflada de preceptos que se orientan hacia una vida en común que podría tendencialmente llevar a la instauración de un “socialismo comunitario”. El Estado plurinacional debe potenciar la economía social y comunitaria en primer término, en el marco de una economía plural; las autonomías indígenas suponen el control absoluto por parte de las comunidades de las esferas sociales (economía, cultura, política, etc.), los lineamientos sobre los que se basa el Estado responden a la cosmovisión cultural indígena-campesina, y deben protegerse y expandirse. En segundo lugar, la política de tierras durante la primer gestión evista ha presentado avances significativos, una clara orientación estatal llevó a priorizar la titulación de de tierras de manera colectiva, tanto en las comunidades

indígenas como en las campesinas, logrando que en el vital tratamiento de los medios de producción se lograra priorizar la estructuración común, atacando en lo posible la propiedad hacendal. En tercer lugar, podríamos considerar el “lado bueno” de las nacionalizaciones, que bien podrían resolver la histórica “querrela por el excedente” -al decir de Zavaleta Mercado- y fomentar un tipo de acumulación que solvente la construcción de una sociedad otra. En cuarto lugar, esta direccionalidad de la política hacia abajo y, sobre todo, “desde abajo” hemos visto que signo el recorrido de la crispación política aun en los momentos en los que la figura del Estado parecía pasar al frente. En otras palabras, la acción colectiva indígena-campesina a la defensa del proceso de cambio continuo presentándose como una maquinaria de guerra dispuesta poner el cuerpo para defender las conquistas; es decir, aun pervive la potencia societal como clave que subtiende la totalidad de la revolución boliviana.

Nótese que lo presentado no es más ni menos que el recorrido que se ha querido mostrar en nuestra entera narración. La temporalidad de la hablamos – independientemente de si es una secuencia concluida, derrotada, victoriosa, inconclusa, interrumpida o permanente- es la de un proceso político en marcha, cuyo primer ciclo desde el año 2000 al 2005 presenta una fase ascendente de luchas sociales que va desde el la Guerra del Agua hasta la Guerra del Gas, cuando comienza a vislumbrarse un recurrente empate hegemónico, en el que se polariza el campo político, se define la posición de los actores y sus principales áreas de influencia y se esclarecen sus objetivos y marcas identitarias. A partir del arribo del MAS a la presidencia, a fines de 2005, comienza un segundo ciclo que no deparara menor movilización social, si en un principio las antiguas élites desalojadas del gobierno nacional resisten en la “medialuna”, y sobreviene una meseta caracterizada por el avance en las medidas progresivas del masismo desplazándose la lucha de calles hacia la Asamblea Constituyente, a fines de 2007 arrecia el antagonismo frontal. Al desplomarse el cónclave, bajo la novedad de que es la oposición organizada la que propicia la inestabilidad y la crispación, retomando el protagonismo y pasando a la acción por primera vez desde el inicio del proceso, se inicia una fase de tensión que tendrá su apogeo en septiembre del 2008, tras la gran confrontación que tendrá al Congreso Nacional arrojando un “consenso” sobre los contenidos básicos de la novísima carta magna. En la cúspide de las conquistas, entonces, se presentó el problema por el desenlace que tomará un proceso que nunca dejó de tener a las organizaciones sociales por protagonistas principales de su sostenida expansión hegemónica, cultural e intelectual. Bajo este prisma, el grado de conflictividad social descenderá de ahí en más paulatinamente, dando paso a una relativa estabilización de las fuerzas sociales hasta la reelección de Evo Morales al concluir el año 2009, presto a encarar un nuevo mandato.

A la hora de mapear los sectores que pulsean por inclinar hacia aquí el rumbo del proceso de cambio al interior del gobierno nacional habría que mencionar que esta corriente, aunque minoritaria, estuvo embebida en la tradición de izquierda del país e influenciada por las experiencias radicales clásicas y actuales de Latinoamérica. Más concretamente, a la perspectiva de construir un “socialismo comunitario” en el que se entran los lazos sociales poscapitalistas a partir de la fuerza embrionaria de la comunidad adhirió la

“rama cubana” del gobierno, representada fundamentalmente por antiguos militantes del PC y de la izquierda guevarista respaldada en el sentido apego que expresa Evo por la isla caribeña. A su vez, ahondó sus raíces en el movimiento indígena katarista que pugnó por consolidar la revolución democrática y cultural, designio que se asentó en la creencia indianista, pero que tuvo escasos representantes en el Estado, entre ellos, el canciller David Choquehuanca, y una serie difusa de dirigentes sociales originarios, fundamentalmente aymaras. En esta corriente se entremezclaban posiciones que reforzaron la negativa hacia las “ideologías modernas”, otras que acentuaron la potencialidad comunitarista, y hay quienes pusieron el acento en la significatividad de la “cosmovisión indianista”. No son pocos los que constituyen esta corriente, que apunta por una avanzada del proceso acentuando su perfil político-emancipatorio. Sería iluso suponer que será una tendencia la que triunfe y destrone a las otras de todo influjo, la mayor probabilidad es que un amplio abanico de posibles que van desde el capitalismo de Estado hasta el socialismo comunitario convivan en tensión creciente, mixturándose y suplantándose mutuamente; aunque indudablemente algún desenlace para esta revolución será dominante. Actualmente, más que las rispideces que se brotan entre las perspectivas industrialistas y ecologistas, entre el retorno del ciclo nacional y la emergencia indigenista, más allá de la supuesta creación de un estado renovado, aparte de si fuese democrática, burguesa, popular, socialista, antimperialista o campesina, lo central es definir la línea de demarcación dispuesta para con la lógica pura de la acumulación capitalista.

### **Lógica de la revolución**

La actual coyuntura posee diferencias de peso con respecto a la Revolución Nacional del 1952, puesto que aquí no existió un ala independiente y homogénea ideológicamente, predominante y conductora a la manera de la “pequeñoburguesía en su contenido preburgués” (Zavaleta,1988:69) del estructurado MNR que dominó por entonces los destinos del país. Tampoco un proletariado *stricto sensu* fue la punta de lanza que barrió de un solo golpe con la faz coercitiva del Estado, así como no existe ese tándem cuasi señorial que entrelazaba a los hacendados con los “barones del estaño”, artífices del “super estado minero”. Ni siquiera podría pensarse que la situación internacional es comparable de primera mano, la injerencia de USA no gravita como lo hacía entonces y la mundialización de hoy no es la de ayer. En paralelo, más cerca en el tiempo, también es necesario sostener que es difícil trazar una analogía rápida con aquella experiencia de mando obrero que gestó la Asamblea Popular durante el gobierno de Torres en 1971, dado que los protagonistas de entonces fueron la izquierda partidaria, el proletariado minero y unas FFAA llamadas a cortar de cuajo las ilusiones socialistas; sectores muy disímiles a los que tallan hoy.

Si las situaciones revolucionarias que transitó Bolivia en su historia contemporánea solo parcialmente habilitan a trazar una analogía con la actual puede que insista una suerte de invariante: Las revoluciones interrumpidas en Latinoamérica -de la que la Revolución Nacional es uno de sus ejemplos más palmarios-, segregan como problemática principal la tensión entre la radicalidad

del proceso político revolucionario y las condiciones internas de desarrollo desigual y combinado en condiciones de dependencia y neocolonialismo. Naturalmente, lo que se interrumpía no era precisamente la marcha de los estratos más favorecidos. En una escala mayor, el desenlace de las dos revoluciones sociales latinoamericanas en las que el peso del campesinado era importante -la mexicana y la propia insurrección de abril-, se precipitó a largo plazo reforzando las tendencias que estimularon y borrarón los obstáculos que impedían el avance del capitalismo, de modo que asistimos a grandes gestas que tendían a desfallecer; pero aún así la misma revolución mexicana grabó su impronta en el entero siglo XX y ni hablar de la gesta cubana que cruzó el límite sin interludios. A diferencia, en este país mediterráneo sobresale un larvado decaimiento interno.

El actual proceso político boliviano parece haber habilitado el camino para consolidar una serie de mutaciones amplias, logrando que la serie de temporalidades latentes pasen a consumir una suerte de realización, cuya clave reside en el emplazamiento de un modo de acumulación “moderno” y un modo de regulación que le haga de soporte, esto es, un “Estado equilibrado”<sup>7</sup>. En cierto sentido podría tratarse de la actual realización de las disímiles memorias históricas que se fueron apilando al despuntar el ciclo político boliviano contemporáneo.

En primer lugar, aquella demanda de inclusión autoinstituyente de los sectores indígenas y campesinos, el ataque al dominio asentado en la estirpe racial, indudablemente encontró en la NCPE la escritura de sus premisas programáticas, que han devenido Estado, realidad ético-política de la prulinalidad. Y, -aunque suene paradójico- también parecen haber encontrado su cauce la ansias de consolidar cierto republicanismo liberal, que allanó el camino para su concreción: la institucionalidad actual combina de un modo especial dosis de comunitarismo en medio de un sistema de poder “clásico”, cuya clave reside en que ahora es viable precisamente porque resulta medianamente incluyente de los sectores antes excluidos. Bolivia ya no podrá desconocer a su mayoría poblacional, muy por el contrario, ella misma ha desbaratado cada uno de los sistemas de dominación que la condenaba a la segregación étnica y cultural para lograr que la ley madre sea buena medida análoga a la “ley de la tierra” que se da de modo efectivo en el país. En otras palabras, se encuentran abiertas las puertas que promueven la igualdad jurídica y política dado que aymaras, quechuas y guaraníes, y en cierta medida el resto de las 33 etnias del país, pueden considerarse ciudadanos plenos del Estado Plurinacional de Bolivia, es decir, se plasma -con más o menos intensidad podrá decirse- aquella “memoria larga” signada por el katarismo, por las reivindicaciones de los pueblos indígena-campesinos, al tiempo que lo hace aquella latente del republicanismo independentista.

En segundo lugar, puede que el reposicionamiento del Estado en la economía venga a consolidar el camino por el cual un capitalismo viable se asiente en el país, al fin y al cabo se trata de consolidar en el marco de lo existente un proyecto económico capaz de gestar aquellas tareas pendientes de la Revolución del 52, esto es, un mercado interno integrado, una economía balanceada socialmente, una modernización ecuánime, un explotación a gran

escala en el que el capital sea atemperado por la administración pública. La ganancia nacionalizada se revertiría endógenamente y no se externalizaría sin freno, abriendo la puerta para intentar darle un rumbo nuevo a la histórica “querrela por el excedente”. En estos últimos cinco años Bolivia ha engrandecido su Estado a nivel económico pero también políticamente se ha democratizado, en la medida en que incorporó una nueva visión estatal, resituó canales para habilitar la participación social, avanzó con medidas “incluyentes” como la conformación de las autonomías indígenas campesinas, en suma, expandió su radio de recepción de las demandas que parten de la sociedad civil y consolidó la “sociedad política”. En los hechos se trató de alcanzar el orden moderno, que fue uno de los objetivos neurálgicos de la “memoria mediana”, es decir, el “libro de abril” en tanto gramática de las “tareas nacionales”.

Claro está, la hegemonía efectiva lograda al despuntar 2010 llevará a una definición -de derecho o de hecho- más fina de la orientación ideológico-política que moldeará el país. Tras la movilización de fuerzas y la crispación del ambiente político que terminó en la derrota de la oposición, y luego de los aplastantes triunfos electorales de la maquinaria masista, será en los cinco años venideros del segundo mandato de Evo Morales cuando podrán calibrarse los alcances de la gestión concreta y la dirección central de la política de cambio. La situación, paradójicamente, no es del todo desalentadora, en cierto sentido se ha entrado en un nuevo orden, la constitución espera su mejor aplicación, la oposición ha sido recurrentemente derrotada y las fuerzas desatadas -como ha ocurrido tantas veces- no han generado un caos incontenible ni han llamado a la restauración. Sigue en pie el mismo gobierno que es producto del ciclo político porque los sujetos que encararon la revolución triunfaron.

Con todo, el “evismo” bien operó sobre la contradicción teñida de racismo, pero aun insiste la herencia de la colonización y, fundamentalmente, divide aguas la tensión a la que lleva la agudización de la “segunda contradicción del capital” entre la lógica de acumulación y la naturaleza, en palabras de O’Connor (O’Connor, 2001); entrelazada a su vez con lo que podríamos llamar, clásicamente, la primera contradicción entre capital y trabajo, así el horizonte anticapitalista parece dejarse a un lado. El riesgo radica en que la ritualización de lo cultural se adose a un nacionalismo que adviene del todo bien con la expansión mercantil y sirva de desplazamiento de la contradicción principal, en una suerte de “revolución de baja intensidad” y consolidación de las “estructuras coloniales” y dependientes, en el límite, una “revolución pasiva” puesto que no hay descolonización verdadera si no existe ruptura actuante respecto a las múltiples formas de dominación. En otros términos, el peligro es la desarticulación de lo que fue la sabia única del proceso: marxismo y katarismo instituyéndose como las “dos razones revolucionarias” (García Linera, 2005).

Una especificidad boliviana ha sido que históricamente el capitalismo no respetó las premisas sobre las cuales afirma descansar, de modo que no consolidó la igualdad jurídica, política y formal a la par que expandía su lógica económica, esto es, la desestructuración de las lógicas comunitarias y su

reemplazo por la primacía del intercambio asalariado. Ahora bien, una opción es que el Estado asuma aquellas tareas que no encara una burguesía inexistente y entonces estaríamos en presencia de una revolución igualitaria, democrática y cultural, tan moderna como liberal, que culminaría por eliminar los obstáculos que impiden la tan mentada “modernización”. En otras palabras: la profundización de esta tendencia no representaría un hecho desconocido en América Latina, sería por el contrario la consumación de un destino tendencialmente burgués, donde las fuerzas populares en ascenso cumplirían “las tareas” que demanda la persistente expansión del capital.

Empero, dos reflexiones se desprenden de lo antes dicho. A diferencia de la Rusia zarista, donde la sociedad civil se supo primitiva y el Estado era preponderante, militarizado y fuerte, también a distancia de la Italia de entreguerras cuya sociedad civil era robusta, con sus sistemas ideológicos consolidados y un Estado capilar, en Bolivia la sociedad civil siempre fue tremendamente densa y organizada y, como contraparte, la sociedad política - el “Estado aparente”- acusó una permanente debilidad, causas que contribuyeron a explicar las oportunidades abiertas para que los movimientos sociales expongan su poder, pero que también señalan una suerte de debilidad primigenia que los esperaba cuando accedían al gobierno. Así Bolivia, evidentemente, tendría los defectos de sus virtudes: las mismas razones que facilitan la radicalidad la limitan. Notoriamente, la experiencia emenereista enseñó que la dificultad estructural para gestar un capitalismo nacional, para que el Estado tomase el relevo de aquellas tareas democrático-burguesas irrealizables por una burguesía inexistente; en los momentos en que se topo con su incapacidad estructural, con un debilitamiento general, llevó a retrotraer a las conquistas logradas a cero.

Más claramente: el “libro de abril” perduró durante 12 años en virtud de medidas aprobadas en los primeros 18 meses. Ya para mediados del 53, el primero de mayo precisamente, el secretario ejecutivo de la COB -Lechín- aceptó la necesidad de contar con un aparato militar formal para suplantarse a las milicias (que igualmente tenían su control político oficial), al tiempo que el MNR fomentaba la rivalidad interna del sindicalismo revolucionario puesto que la resistencia obrera no decaía. La supremacía política del partido se institucionalizó, copando el Estado (en cuatro años se duplicó la cantidad de funcionarios), los técnicos “pequeñosburgueses” asumían el mando de la minería sobre la “cogestión”, mientras consolidaba sus redes institucional-partidarias a escala nacional gracias a los recursos públicos. El cogobierno se diluía al compás del peso del MNR, claudicante el segundo congreso de la COB llegó a declarar: “Nuestra revolución es popular antes que democrático burguesa o proletaria” (¿acaso hasta los mismos obreros de Huanuni y Siglo XX no terminaban siendo emenereistas?, como bien afirmó Gustavo Rodríguez Ostría (Rodríguez, 1991)). Contrarrestar el peso minero del sindicalismo revolucionario recayó sobre el tejido de una densa red que unía a las altas esferas emenereistas, con los dirigentes indígenas y sindicales, ambos promotores de la reforma agraria y conductores de las milicias campesinas, gestando una subordinación pasiva del movimiento; que no por casualidad - como dato fatal- conformaría la estructura originaria del pacto militar-campesino, ya decididamente conservador.

Es que la ausencia de condiciones económicas mínimas –lo que en términos clásicos se denominaba desarrollo de las fuerzas productivas- obligaba a considerarlas, en una suerte de realismo pragmático de gestión que debió atender la gobernabilidad y el basamento de reproducción de la propia política, elección siniestra porque el peso de los “requisitos económicos” y la imposición de la “estabilidad” tendía a debilitar -en verdad- una ebullición política que era nervio del alzamiento. Concretamente, la gran inflación, el déficit y la caída de los precios de los minerales estatizados llevaron al MNR a fines de 1953 a pedir ayuda financiera a Estados Unidos, para el 55’ una parte muy significativa de recursos públicos se destinaba a Santa Cruz, para 1956 Estados Unidos contribuyó al diseño del “plan de estabilización” y dos años después un tercio del presupuesto público dependía de sus fondos. En rigor, la estatización emeneresita a largo plazo trajo resultados esquivos: no se conformó un mercado nacional y el incipiente desarrollo industrial tuvo por correlato la gestación de un “excedente sin acumulación” producto de la presencia del Estado en sectores estratégicos de la economía. En los hechos, la extracción estañífera se vinculó al mercado mundial (a través de su mediación se realizaba el proceso de reproducción), pero no brindó estímulos integradores hacia el sistema económico local, antes que ello, contribuyó a reforzar la dominación política como forma básica de organización de la producción en el vasto entorno agrario que le servía de soporte y complemento (Grebe López, 1983), es decir, un tipo de inserción internacional signada por patrones de subordinación neocolonial y sobredeterminación imperialista. En cierto sentido, aún en las pocas tentativas donde la Revolución Nacional triunfó, su victoria no hizo más que expandir la acumulación por desposesión o la producción de excedente sin acumulación interna, lo cual retrotraía las conquistas a cero.

Ciertamente, fue Sergio Almaraz el que caratuló en su *Réquiem para una república* -tal como oportunamente vislumbró Raúl Prada- que el MNR fue desahuciándose hasta que le llegó “el tiempo de las cosas pequeñas”, esto es, la insurrección de abril fue “retrocediendo poco a poco, peleando aquí, cediendo allá, sin dejar de hacer el cálculo puntilloso de dónde podía resistir y dónde resignarse” (Prada, 2010b: 1; Almaraz, 1970). Ya para el segundo mandato presidencial, en 1956, comienza la curva descendente para ir transitando un derrotero marcado por la “efectiva capitulación diferida”. En la hora final, el golpe barrientista del 64 enfrentó a la inocua resistencia de Laicacota -una elevación estratégica en La Paz-, que reunió a un grupo de civiles armados ensayando una respuesta desordenada, el reducto fue bombardeado y ametrallado por la aviación y sus ocupantes murieron o tuvieron que huir, aliento final de una escena saldada puesto que “en Laicacota se disparó sobre el cadáver de una revolución”. Claro está, son imágenes que tornan clara la particular desestructuración interna de la pujanza revolucionaria del 52.

Hecha la revolución, procurando esquivar la dicotomía que la opone a la reforma, el problema pasaría a ser cuál es el desenlace que le espera, los senderos por los cuales persevera el proceso de cambio. Si la época que la NCPE abre podemos catalogarla de transicional existen dos vías en torno a la forma en como es posible pensar el acceso a un horizonte emancipatorio

radical. Lo que parecería primar es una transición inorgánica y diferida, esto es, actualmente el mando estatal de la economía, en el mejor de los casos que interiorice su excedente, parecería aumentar la disponibilidad del circulante mercantil (bonos, pensiones, etc) y propiciar una mayor acumulación de los sectores indígena-campesinos, donde se afiance su participación en los circuitos económicos, y de ese modo se resituaría la prescripción de superar el arcaísmo de los modos de producción no capitalistas. A este panorama se suma lo siguiente, que estemos en presencia de un “Estado equilibrado” significa que al llegar la hora del pactismo en octubre de 2008 se privilegió afianzar el orden por sobre el antagonismo que acarreaba modificar de base las estructuras coloniales del Estado. En otras palabras, más que una democracia comunitarizada lo que tenemos es un tipo de estructuración de las decisiones piramidal y excluyente, lo cual segrega una suerte de desicionismo presidencialista cuya razón de Estado reza no profundizar ciertas medidas, sino al revés. Por último, dado que las relaciones de producción capitalistas se desarrollan en Bolivia de una manera extremadamente desigual entre los diversos sectores, ramas y regiones del país, la élite económico-política dispone de enorme autonomía respecto de los nuevos soportes clasistas a los que serviría actualmente el Estado Plurinacional.

En segunda instancia, tendríamos lo que podría llamarse una transición orgánica y actual, lo cual supone una serie de políticas específicas. Claro está, se trataría de apuntalar los conatos de socialismo en germen que existen en Bolivia, y esto significa priorizar de modo decisivo la matriz comunitaria del país y su papel en la formación económico social, como lógica tendencialmente dominante. En el plano económico se trataría de avanzar sobre la titulación colectiva de la tierra, en la expropiación de las haciendas que no cumplen la función económico social, de sostener las alternativas de posdesarrollo capaces de crecer en el país, de interrumpir los circuitos de valorización financiera, de estimular la pronta concreción de una democracia comunitarizada, eliminando la distancia entre la sociedad civil y la política, de modo tal de generar una relación orgánica entre bases y dirigentes, de combatir el surgimiento de un sector dirigente burocratizado, de continuar estimulando el antagonismo político en aquellos lugares que demanden soluciones progresistas, y demás.

Si la Revolución pareciera desfallecer es porque, paradójicamente, actúa según la lógica de lo posible. Acaso la opción por una política que apunte a interiorizar los excedentes a partir de resituar el papel económico del Estado en detrimento de las empresas multinacionales no aparece como una acción razonable. Lo cierto es que el camino desarrollado en este trabajo nos permite aseverar que la brecha entre las propuestas que sostenían un pluralismo político basado en una democracia directa nacional para desmontar profundamente las estructuras del Estado colonial y una realidad en la que el MAS se consolida como núcleo de direccionamiento del país es amplia, y lo mismo sucede con la tensión entre la matriz que impone el recambio civilizatorio contenido en la idea fuerza del vivir bien y el “salto industrial boliviano” de dudosa altura, y de igual modo se dilata la brecha entre las propuestas de extender fuertemente la reforma agraria bajo el criterio de titular la propiedad en términos comunes y la política de seguir alimentando una parcelación individual que no obstaculice al

mercado de tierras o, incluso, la directa consolidación del latifundio<sup>8</sup>, en suma, son problemas propios de un direccionamiento político que parecen no apostar a las directrices más emancipatorias que iluminó el ciclo político boliviano. En otras palabras, una vez alcanzado el auge del ciclo, allá por octubre de 2008, comienza un paulatino pero cada vez más pronunciado y decidido descenso, en el cual la maquinaria estatal tiende a reproducirse sin habilitar transformaciones, el partido en función de gobierno contribuye a la subordinación pasiva y a la división del movimiento indígena-campesino y la política se limita al peligroso destino de la administración, como si los cambios ya hubiesen sido hechos.

Naturalmente, estamos hablando de otra interrupción, la de suspender la evidencia de la historia, el ilusionismo desarrollista, la raíz posibilista de los hechos, la lógica dominante sobre el quehacer de la razón de Estado, para interrumpir la lógica del capital, lo que no es más que la recurrente destrucción del estado de cosas existente, potenciar indefinidamente los marcos democráticos y participativos, acentuar y recrear la narrativa emancipatoria, sostener la militancia política, apuntalar las brechas donde el socialismo se abre paso en medio de la lógica depredadora de la ganancia, porque al fin y al cabo no hay otra definición de Revolución.

Si una sociedad tiene el destino que le permite su armazón social, es preciso subrayar que el carácter abigarrado de Bolivia supone la convivencia de múltiples formas de producción que, a su turno, tornan difícil prescribir un rumbo de estructura preciso, pero por esa misma causa la acción política tiene un amplio margen para incidir sobre el destino del país. Resulta para nosotros determinante afirmar que en condiciones de abigarramiento social no será el automático despliegue de las cosas sino la política en sentido fuerte quien tenga la última palabra. Sucede, correlativamente, que ninguna facción económica, sea plebeya u “oligarca”, tiene el peso suficiente como para direccionar el rumbo o incluso para vetar o inhibir opciones, es ahora el Estado el mayor actor político y económico, y en ese sentido tiene potestad para diseñar el tipo de horizonte que Bolivia querría para sí. Reside en ese complejo entramado de sectores sociales y grandes figuras que tienen las riendas del país la clave para sobredeterminar el rumbo del proceso; en un punto, más que apelaciones voluntaristas se trata de inventar un destino, esto es, un programa instituyente de tinte radical hoy etéreo.

Ahora bien, cuáles son, entonces, las causas por las cuales parecería primar, en verdad, una bifurcación hacia la restauración. Inevitablemente hay que referirse a dos elementos entrelazados de especial relevancia en la esfera política. Una reflexión final recae sobre las características del sujeto político que comanda el proceso de cambio; y cuya lógica ambivalente se encuentra – en última instancia- en lo que podemos llamar el carácter dual de la “forma comunidad”. El avance del ciclo se sustentó en la constitución de un bloque de poder plebeyo, que carecía de un mando fijo y se articulaba en la lucha misma, cuando nacionalizaba sus consignas -así ocurrió con la Guerra del Agua y del Gas, con la Asamblea Constituyente-; esa agregación imparable dirigida por las organizaciones indígena-campesinas dio cuenta de la sólida construcción de una voluntad nacional-popular, de una acción de masas, e indudablemente fue

la que asumió el mando del bloque de poder y trazó los lineamientos programáticos mayores. Empero, las discrepancias entre los sectores campesinistas e indígenas no ha sido menor en ningún momento del proceso, fundamentalmente debido a que los constructores centrales de MAS estuvieron generalmente dispuestos a limitar la propiedad colectiva de la reforma agraria, el alcance de las autonomías indígenas o la cantidad de plazas indígenas en la Asamblea Plurinacional.

Si uno vislumbra la composición de clase los sectores campesinos, se encuentra con la tradicional economía campesina transida por tipos de propiedad y tenencia individuales y parceladas, de economías domésticas y artesanales cuyo proceso de trabajo se asienta en la unidad familiar, esto es, un tipo de quehacer cotidiano que bien puede sostener las luchas antiimperialistas y las consignas sobre la necesidad de socializar los bienes comunes, pero que se encuentran inmersos en la lógica mercantil de la que participan de principio a fin; participación de la que no están exentas las comunidades de raíz indianista. En otros términos, el mismo sujeto actuante es capaz de arremeter con suma fuerza contra las exclusiones a las que obliga la colonialidad institucionalizada pero no necesariamente su horizonte de acción consiste en llevar hasta sus últimas consecuencias la lucha política que clama por un socialismo comunitario que apunte a abolir su vecindad con el capital. Correlativamente, esta composición es solidaria a una maquinaria estatal comandada por una capa dirigencial que procura apuntalar las redes clientelares, la organización jerárquica de las comunidades, asumiendo una visión estatal de corte patriótica que ideológicamente piensa representar al país como un todo, lo cual los lleva a rechazar las “particularidades” movimientistas para mejor navegar en la reproducción del poder; convirtiendo al MAS en el condensado unívoco de la plural sociedad civil (Mokrani y Uriona, 2011).

Existen las condiciones de base sobre las cuales soportar un tipo de socialismo comunitario a nivel de estructuración societal, se si se ve desde el ángulo político, socio-económico y cultural. Bolivia, ciertamente, fue capaz de crear una nueva narrativa emancipatoria sostenida en efectivas organizaciones indígenas y campesinas, y posiblemente no halla otro país en condiciones de brindar una respuesta a la lógica actual del capital como este singular corazón latinoamericano. No cabe duda que los sujetos que en 2000 arremetieron en medio del ciclo no son los mismos que en el 2010, luego de haber transitado una experiencia política de múltiples aristas innovadoras. Recordemos que la historia boliviana no dejó de exponer la potencia real de la política, así como inconclusas se presentaron las revoluciones el andar de la resistencia plebeya no conoció respiro, de modo que las últimas cartas no están echadas. Claro está, la imponente maquinaria organizacional subalterna permanece inalterada y las posibilidades de la revolución están abiertas, la constitución misma puede ser pensada como un programa en acto de transición hacia el socialismo comunitario. La revolución, como siempre, está ahí al alcance de la mano para recomenzar, y esa es su lógica íntima, no empezar ni terminar, sino recomenzar, no sabe de utopías para un futuro sino de la responsabilidad de un presente.

## Bibliografía

- Almaraz, S. (1970). *Bolivia. Réquiem para una república*. Uruguay: En marcha.
- García Linera, Á. (2005). "Indianismo y marxismo". *Revista Barataria*. N° 2. La Paz: Malatesta.
- García Linera, Á. (2010). "El socialismo comunitario. Un aporte de Bolivia al mundo". *Revista de análisis*. Año III, N° 5. Bolivia: Vicepresidencia del Estado Plurinacional.
- Grebe López, H. (1983), El excedente sin acumulación. La génesis de la crisis económica actual. En R. Zavaleta (comp), *Bolivia hoy*. México: Siglo XXI.
- Lazarus, S. (1997). *Antropologie du nom*. París: Seuil.
- Mokrani D. y Uriona P. (2011) "Construcción hegemónica o monopolización de la política: El MAS y las posibilidades del proceso de cambio". *OSAL*. Año XII, N° 29. Buenos Aires: CLACSO.
- O' Connor, J. (2001). *Causas Naturales, Ensayos de marxismo ecológico*. México: Siglo XXI.
- Prada, R. (2010) "Economía y sociedad". Bolivia: mimeo.
- Prada, R. (2010b) "Tiempo y política". Bolivia: mimeo.
- Rivera Cusicanqui, S. (1985) Apuntes para una historia de la luchas campesinas en Bolivia (1900-1978). En P. González Casanova (Coord.), *Historia política de los campesinos latinoamericanos*. Vol.3. México: Siglo XXI.
- Rodríguez Ostría, G. (1991) *El socavón y el sindicato. Ensayos históricos sobre los trabajadores mineros. Siglos XIX – XX*. La Paz: Inst. Latinoamericano de Investigaciones Sociales.
- SENA-Fobomade, (2010). "Mutaciones del vivir bien" [On line] Disponible: [www.bolpress.com](http://www.bolpress.com)
- Svampa, M., Stefanoni, P. y Fornillo B. (2010) Entrevista a David Choquehuanca. En M. Svampa, , P. Stefanoni, y B. Fornillo, *Debatir Bolivia*. Buenos Aires: Taurus.
- Tortosa, J. M. (2010) "Sumak Kawsay, Suma Qamaña, Buen Vivir". *Observatorio Latinoamericano* 4. Buenos Aires: Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe-Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
- Zavaleta Mercado, R. (1988). *50 años de historia*. La Paz: Amigos del libro.

---

<sup>1</sup> El presente trabajo es un avance provisorio de un capítulo de mi tesis de doctorado, la cual se encuentra en proceso de redacción.

---

<sup>2</sup> Según datos de la CEPAL, si en 1999 en situación de pobreza e indigencia se encontraba el 60,6 y 19,8 respectivamente para el 2007 se pasaba al 54 por ciento y 16,2. Los datos acerca de la brecha de ingresos no parecen más prometedores, si el sector mas pobre recolectaba el 1,5 por ciento del ingreso en el 2002 para el 2007 pasó al 2 por ciento, mientras que en iguales años el el sector mas rico pasó del 64,5 a 60,5.

<sup>3</sup> Álvaro García Linera, testimonio difundido por el canal estatal de televisión.

<sup>4</sup> Viene al caso referirse aquí sucintamente a los paradigmas de la historiografía americana del período “colonial”, que aportan a una complejidad mayor al de por sí intrincado panorama presentado. A modo de resumen, durante los años 60 y 70, a contramano de las miradas que naturalizaban los efectos del “descubrimiento” hispánico, se contrapuso una perspectiva —cuyo escrito inaugural es *Los vencidos*, de Nathan Wachtel— que acentuaba el carácter “desestructurante” de la “conquista”, la cual habría llegado a poner en jaque la existencia misma del universo indígena luego de destruir su poder político superior. Sin embargo, en las últimas décadas una consolidada corriente historiográfica dialoga críticamente con aquella perspectiva debido a que ella situaba en un papel pasivo a las comunidades indígenas al tiempo que se veía impedida de explicar su sorprendente continuidad —con cambios, claro está— por más de quinientos años. De modo que las investigaciones resaltaron la constitución de “estrategias” activas de resistencia, mostrando de qué modo los procesos de hibridación y trashumancia de los “comunarios”, la resistencia a la “colonización del imaginario”, el carácter de mediador de los *kurakas* (mayor autoridad de la comunidad, del *ayllu*) entre la “república de los indios” y la “república de los españoles”, y la persistente participación en el mercado, lejos estuvieron de destruir la base comunal sino que fueron precisamente algunas de las causas que permitieron su notable supervivencia.

<sup>5</sup> Por esta vía, aunque el mismo García Linera haya caracterizado -en el que posiblemente sea uno de sus mejores artículos-, la existencia de un sistema dual en la Bolivia de comienzos de siglo, en la que de manera desigual un cúmulo de grandes multinacionales amparadas bajo un Estado fiel se combinaba con un mar de pequeñas propiedades, de trabajadores y campesinos en condiciones de franca precariedad, y fuese precisamente ese papel de las grandes grupos económicos el que pareció ser suplantado por el nuevo Estado, que incluso se ufano de llamar integral a la manera gramsciana, que si así fuese debería entroncarse con el obrero social boliviano. Véase: estado integral o forma comunidad.

<sup>6</sup> Evo Morales invitó a ella reclamando el protagonismo del “pueblo” y de los movimientos sociales durante la Cumbre del Cambio Climático realizada en Copenhague, en diciembre de 2009, que agrupó a través de la ONU a los altos mandos presidenciales, aunque con escasísimo resultado. Las repercusiones que tuvo el encuentro cochabambino fueron muy amplias, tanto para advertir de la problemática ambiental “desde abajo” a escala planetaria como en la propia escena doméstica, ya que la extraoficial “mesa 18” (rechazada por la organización oficial y propiciada, entre otras, por la principal organización de raíz aymara, el Consejo Nacional de *Ayllus* y *Markas* del Quyasullu -CONAMAQ-) vino a cuestionar la certeza de que la consigna “evista” que anunciaba el respeto a la madre tierra sea lo que el gobierno desea para sí.

<sup>7</sup> Ciertamente es que el vicepresidente mencionó, a la manera gramsciana, la llegada de un Estado “Integral”, como operador central de la transición entre el la dominancia capitalista de la formación económico social y el lento arribo de un socialismo comunitario. Sin embargo, estamos ante una sociedad política que dejó en suspenso la conformación de una democracia intensa en aras de su estabilidad, podría decirse que en verdad estamos en presencia de un “Estado equilibrado”. (García Linera, 2010).

<sup>8</sup> Al despuntar el segundo mandato presidencial, Alejandro Almaraz, quien sostuvo la política reseñada durante toda la primer gestión del MAS, fue remplazado al frente del Viceministerio de Tierras por Víctor Camacho González, quien suele decirse que viene a inclinarse por el ala campesinista del gobierno, especialmente hacia la CSUTCB, de quien fue asesor. A la acusación campesina que miraba con resquemor como los indígenas del “oriente” se estaban convirtiendo en “nuevos hacendados” puede que le haya llegado el turno de direccionar la política de tierras. El escenario está abierto, a mediados del 2010 la matriz de las comunidades indígenas -la CIDOB-, llevó adelante su primer movilización contra el gobierno del MAS, y solo un acuerdo cuyo punto fundamental rezaba continuar con la titulación de TCO en el oriente suavizó la protesta, aquietándola antes de arribar al Palacio Quemado. Será, por tanto, en este segundo mandato que podrá saberse si la reforma ha venido a modificar radicalmente el paisaje agrario o a refrendar la expansión del latifundio.